

PROCLAMA CONSTITUCIONAL Y CÍVICA AL PUEBLO DE CUBA

Ejercicio directo de la soberanía popular al amparo del Artículo 3 de la Constitución de la República de Cuba (2019)

PROCLAMA

SECCIÓN I — DETERMINACIÓN DE SEGURIDAD INTERNACIONAL Y ACTIVACIÓN DE LA SOBERANÍA POPULAR

El pueblo de Cuba toma nota formal de la Determinación Presidencial de los Estados Unidos, de 29 de enero de 2026, que califica al régimen de La Habana como amenaza presente a la seguridad nacional y fija el caso de Cuba dentro del Derecho Internacional.

Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, en particular su Artículo 51, esta calificación encuadra jurídicamente la conducta del Partido Comunista de Cuba (PCC) en relación con los riesgos actuales y verificables para la paz y la seguridad internacionales.

En consecuencia, el pueblo de Cuba, como titular originario de la soberanía según el Artículo 3 de la Constitución de 2019, activa el ejercicio directo de su soberanía por medios cívicos, pacíficos y masivos, con el fin de poner término inmediato a un régimen que oprime internamente y amenaza externamente.

La responsabilidad primaria y exclusiva de esta situación recae en el régimen político del PCC. La respuesta del pueblo cubano es legítima, constitucional y necesaria.

SECCIÓN II — ILEGITIMIDAD DEL RÉGIMEN

El pueblo de Cuba desconoce toda legitimidad política, moral y jurídica al PCC, impuesto como partido único por la fuerza y sostenido mediante la represión sistemática, la criminalización del disenso, la ausencia de elecciones libres y plurales, y la negación persistente de los derechos humanos.

La permanencia del PCC en el poder contradice la soberanía popular, vulnera los principios esenciales del constitucionalismo democrático y carece de mandato libremente otorgado por la ciudadanía. En consecuencia, ninguna autoridad emanada del PCC representa legítimamente a la Nación cubana.

SECCIÓN III — DENUNCIA FORMAL Y FIRMA MASIVA

Cuba Demanda convoca a todos los cubanos, dentro y fuera del territorio nacional, a firmar de manera incontestable la DENUNCIA Y DEMANDA contra el régimen político del PCC, encabezado por Miguel Díaz-Canel, como acto jurídicamente válido del ejercicio directo de la soberanía popular.

Las firmas se están recopilando ya en:

<https://cuba-demanda.org/denuncia-demanda-miguel-diaz-canel>

Este acto constituye evidencia documental de la voluntad nacional, además de activar las responsabilidades jurídicas internas e internacionales.

SECCIÓN IV — MOVILIZACIÓN CÍVICA, PACÍFICA Y NO VIOLENTA

Cuba Demanda convoca a una movilización cívica, sostenida, organizada y estrictamente pacífica, como expresión legítima de los derechos de reunión, manifestación y protesta.

Se convoca a ocupar calles, plazas y otros espacios públicos; a manifestarse ante las sedes del PCC y del Poder Popular, y frente a las embajadas y consulados de Cuba en el exterior, con el objetivo de dar expresión visible a la voluntad soberana de exigir el fin del Estado totalitario y reclamar la transición democrática inmediata.

Las consignas oficiales de esta movilización son: #ElCambioEsYa y #ComunismoNo. Toda acción deberá prescindir de la violencia y orientarse de manera pacífica y ordenada a la defensa de los derechos humanos.

SECCIÓN V — EXIGENCIAS INMEDIATAS

En ejercicio directo de la soberanía popular, el pueblo de Cuba exige de manera inmediata:

1. La liberación incondicional de todos los presos políticos y de conciencia.
2. La apertura de puertos y aeropuertos a la ayuda humanitaria internacional, sin interferencias ni condicionamientos políticos.
3. El cese de la represión, la vigilancia política y el uso de la fuerza contra la población.
4. La formación de un Gobierno Provisional de Transición, sin participación del PCC, que garantice el orden público, los servicios básicos y el respeto a los derechos humanos, con el compromiso ineludible de convocar a elecciones libres, plurales y limpias en un plazo razonable no mayor de doce (12) meses.

SECCIÓN VI — FUNDAMENTO LEGAL INTERNACIONAL

La presente PROCLAMA se sustenta en el Derecho vigente, en particular:

- a) La Ley de Solidaridad Democrática con Cuba (LIBERTAD / Helms-Burton), que establece como política obligatoria de Estados Unidos el apoyo activo al pueblo cubano en su empeño de transición democrática.
- b) La Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la protección de la paz y la seguridad internacionales.

c) La Carta Democrática Interamericana, que confirma la democracia como derecho de los pueblos y la acción colectiva internacional en caso de ruptura del orden democrático.

Esta PROCLAMA se enmarca exclusivamente en acciones legales y pacíficas.

SECCIÓN VII — LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Se exhorta a la Organización de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la Organización de los Estados Americanos y a todas las democracias del mundo a respaldar, por medios legales, una transición democrática inmediata en Cuba frente a un régimen político alineado con el autoritarismo global y en particular con China, Rusia e Irán.

SECCIÓN VIII — MARCO DE LEGÍTIMA DEFENSA Y CONDUCTA HOSTIL

El Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas refrenda el derecho inherente de legítima defensa ante ataques armados o amenazas inminentes de igual gravedad.

El 24 de febrero de 1996, el régimen cubano derribó dos aeronaves civiles desarmadas de *Brothers to the Rescue*, causando la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente. El Congreso de los Estados Unidos calificó este hecho como “*criminal attack*” al fundamentar la Ley de Solidaridad Democrática con Cuba. En 2003, un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida acusó formalmente por asesinato y destrucción de aeronaves a una serie de militares cubanos. El Congreso tiene registrada esta acusación como “*outstanding*” (pendiente de resolver).

Consta la confesión de Raúl Castro (<https://vimeo.com/115045287>) de haber dado la orden del derribo de las avionetas, en grabación que incluimos como indicio y línea investigativa sujeta a la autenticación pericial y cadena de custodia para tramitación judicial.

Desde 1996, el PCC ha mantenido un patrón de conducta hostil transnacional, incluyendo su complicidad estructural con el régimen de Nicolás Maduro, el alineamiento estratégico con Irán, la cooperación militar con Rusia y la utilización de Cuba como plataforma de inteligencia de señales de la República Popular China, que entrañan riesgos actuales para la seguridad regional e internacional.

La Determinación Presidencial del 29 de enero de 2026 subsume esta conducta dentro del Artículo 51, sin alterar que la lucha del pueblo cubano es cívica y pacífica, y que toda responsabilidad por una eventual escalada recae exclusivamente en el régimen del PCC.

Miami, Enero 30, 2026

Santiago A Alpizar Esq.
Cuba Demanda Inc.

ANEXO**1. Norma general**

- Carta de la ONU, art. 2(4): prohibición de la amenaza o uso de la fuerza.

2. Excepciones reconocidas

- Carta de la ONU, Capítulo VII (arts. 39–42): acción del Consejo de Seguridad.
- Carta de la ONU, art. 51: legítima defensa individual o colectiva; exige necesidad y proporcionalidad.

3. Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia

- *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States)*, ICJ Rep. 1986: “ataque armado” y estándar de proporcionalidad.
- *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States)*, ICJ Rep. 2003: carga probatoria estricta para art. 51 y proporcionalidad.
- *Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda)*, ICJ Rep. 2005: límites del art. 51 y responsabilidad estatal.

4. Base legislativa de EE. UU. sobre el derribo de las avionetas en 1996

- **LEY LIBERTAD (*Helms-Burton Act*)**: pruebas que califican el derribo como “*criminal attack*” y describen víctimas y contexto (22 U.S.C. § 6046).
- Política pública de apoyo a transición democrática: 22 U.S.C. §§ 6021–6091.
- Ausencia de prescripción penal (EE. UU.). 18 U.S.C. § 3281: la acción penal no prescribe en delitos capitales

6. Indictment federal (S.D. Florida, 2003) y estatus “outstanding” (pendiente, sin resolver) por el Congreso de Estados Unidos de la acusación contra oficiales cubanos por el derribo de las avionetas.**Conclusión**

Esta Proclama es legal y legítima, prioriza acciones pacíficas y sitúa cualquier análisis del ejercicio de la fuerza exclusivamente dentro de los parámetros estrictos de la Carta de la ONU (art. 51 o Cap. VII).

Q&A PREGUNTAS CLAVES

1. Esta Proclama, ¿llama a la violencia o a la intervención armada?

No. Ordena y promueve la acción cívica pacífica. El art. 51 de la Carta de la ONU no opera como autorización automática e inmediata para el ejercicio de la fuerza, sino como marco jurídico aplicable eventualmente.

2. ¿Consta oficialmente el “outstanding indictment” (pendiente de resolver) por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996?

Sí. El *indictment* federal (2003) contra oficiales cubanos está registrado en el Distrito Judicial del Sur de la Florida y el Congreso de Estados Unidos tiene calificada esta acusación como “outstanding” (pendiente de resolver)

CONSTITUTIONAL AND CIVIC PROCLAIM OF THE PEOPLE OF CUBA

Direct Exercise of Popular Sovereignty – Article 3 of the Constitution of the Republic of Cuba (2019)

PROCLAIM**SECTION I — INTERNATIONAL SECURITY DETERMINATION AND ACTIVATION OF POPULAR SOVEREIGNTY**

The People of Cuba formally take note of the U.S. Presidential Determination of January 29, 2026, by which the Havana regime has been designated as a present threat to the national security of the United States. This determination fixes State opinio juris and places Cuba within the international security law framework.

Pursuant to the United Nations Charter, particularly Article 51, this designation legally frames the conduct of the Communist Party of Cuba (PCC) when real, current, and verifiable risks to international peace and security exist.

Accordingly, the People of Cuba, as the original holder of sovereignty under Article 3 of the 2019 Constitution, hereby activate the direct exercise of popular sovereignty through civic, peaceful, mass action, in order to immediately end a regime that is internally oppressive and externally threatening.

Primary and exclusive responsibility for this situation rests with the PCC regime. The people's response is legitimate, constitutional, and necessary.

SECTION II — ILLEGITIMACY OF THE REGIME

The People of Cuba deny all political, moral, and legal legitimacy to the Communist Party of Cuba, a single-party structure imposed by force, sustained through systematic repression, the criminalization of dissent, the absence of free and plural elections, and the persistent denial of fundamental rights.

The PCC's continued rule contradicts popular sovereignty, violates core democratic constitutional principles, and lacks any freely conferred mandate from the citizenry. Accordingly, no authority emanating from the PCC legitimately represents the Cuban Nation.

SECTION III — FORMAL COMPLAINT AND MASS SIGNATURE

All Cubans, inside and outside the national territory, are called to sign massively, freely, and incontrovertibly the FORMAL COMPLAINT AND LEGAL DEMAND against the regime headed by Miguel Díaz-Canel, as a juridical act of direct popular sovereignty.

Signatures are being collected at:

<https://cuba-demanda.org/denuncia-demanda-miguel-diaz-canel>

This act constitutes documentary evidence of national will and triggers domestic and international legal responsibility.

SECTION IV — CIVIC, PEACEFUL, AND NON-VIOLENT MOBILIZATION

The People of Cuba call for sustained, organized, strictly peaceful civic mobilization, as a legitimate exercise of the rights of assembly, demonstration, and protest.

Citizens are called to occupy streets, squares, and public spaces, to demonstrate before PCC and Popular Power headquarters, and in front of Cuban embassies and consulates abroad, to make popular will visible, demand the end of the regime, and secure an immediate democratic transition.

Official slogans: #ElCambioEsYa and #ComunismoNo. All actions must remain non-violent, orderly, and centered on human-rights protection.

SECTION V — IMMEDIATE DEMANDS

In direct exercise of popular sovereignty, the People of Cuba immediately demand:

1. The immediate and unconditional release of all political and conscience prisoners.
2. The immediate opening of ports and airports to international humanitarian aid, without political interference or conditions.
3. The immediate cessation of repression, political surveillance, and the use of force against civilians.
4. The formation of a Provisional Transition Government, without PCC participation, to guarantee public order, basic services, respect for human rights, and to convene free, plural, and verifiable elections within no more than twelve (12) months.

SECTION VI — INTERNATIONAL LEGAL FOUNDATIONS

This PROCLAME is grounded in binding international law, and in particular:

- a) The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (LIBERTAD / Helms-Burton), establishing as mandatory U.S. policy active support for a Cuban-led democratic transition.
- b) The United Nations Charter, recognizing self-determination of peoples and the protection of international peace and security.
- c) The Inter-American Democratic Charter, affirming democracy as a right of peoples and enabling collective international action upon its rupture.

This Proclaim relies exclusively on lawful and peaceful means.

SECTION VII — CALL TO THE INTERNATIONAL COMMUNITY

The European Union, the United Nations, the Organization of American States, and democracies worldwide are urged to support, by lawful means, an immediate democratic transition in Cuba, against a regime aligned with China, Russia, and Iran, and with global authoritarianism.

SECTION VIII — SELF-DEFENSE FRAMEWORK AND HOSTILE STATE CONDUCT

Pursuant to Article 51 of the United Nations Charter, the inherent right of self-defense arises in response to armed attacks or imminent threats of comparable gravity.

Within that framework, on February 24, 1996, the Cuban regime shot down unarmed civilian aircraft operated by *Brothers to the Rescue*, killing three U.S. citizens and one U.S. resident, an act the U.S. Congress characterized as a “criminal attack” in the legislative findings of the LIBERTAD Act. In 2003, a federal grand jury in the Southern District of Florida returned an indictment for murder and destruction of aircraft against Cuban military officers; Congress has described that indictment as “outstanding.”

Public and declassified reporting further refers to the existence of a recording attributed to Raúl Castro(<https://vimeo.com/115045287>) relating to the shutdown order, cited here as an investigative indicator and line of inquiry, subject to forensic authentication and chain of custody, and not as a judicial finding.

Since 1996, the PCC has maintained a pattern of transnational hostile conduct, including structural complicity with Nicolás Maduro’s regime, links to the Cartel de los Soles, strategic alignment with Iran, military cooperation with Russia, and the use of Cuba as an intelligence platform for the People’s Republic of China, creating real and present risks to regional and international security.

The January 29, 2026 Presidential Determination legally situates this conduct within the Article 51 analytical framework, without altering that the Cuban people’s struggle is civic and peaceful, and that exclusive responsibility for any escalation rests with the PCC regime.

Cuba Demanda Inc.

January 30, 2026

Santiago A. Alpizar Esq.

President of Cuba Demanda Inc.

LEGAL ANNEX**1. General rule**

- **U.N. Charter, art. 2(4): prohibition on the threat or use of force.**

2. Recognized exceptions

- **U.N. Charter, Chapter VII (arts. 39–42): Security Council action.**
- **U.N. Charter, art. 51: individual or collective self-defense; strict necessity and proportionality.**

3. ICJ case law (controlling / “good law”)

- **Nicaragua v. United States, ICJ Rep. 1986: “armed attack” threshold; proportionality.**
- **Oil Platforms (Iran v. United States), ICJ Rep. 2003: burden of proof; proportionality.**
- **DRC v. Uganda, ICJ Rep. 2005: limits of Article 51; state responsibility.**

4. U.S. federal legislative basis on the 1996 shootdown

- **LIBERTAD Act (Helms-Burton) legislative findings labeling the shootdown a “criminal attack” (22 U.S.C. § 6046).**
- **U.S. policy supporting democratic transition: 22 U.S.C. §§ 6021–6091.**

5. U.S. federal limitations

- **18 U.S.C. § 3281: capital offenses have no limitation period, subject to charge classification.**

6. Federal indictment and “outstanding” status

- **Federal indictment (S.D. Florida, 2003) against Cuban officers; Congress has described it as “outstanding”.**
- **This document does not assert a publicly verifiable indictment against Raúl Castro; the “audio” is cited only as an investigative indicator subject to authentication.**

Legal conclusion: The Proclaim is lawful and legitimate, prioritizes non-military means, and places any use-of-force analysis strictly within the U.N. Charter (Article 51 or Chapter VII).



Q&A KEY QUESTIONS

1. Does this Proclaim call for violence or immediate armed intervention?

No. It mandates civic, peaceful, non-violent action. Article 51 is referenced as a legal framework, not as automatic authorization.

2. Is the “outstanding indictment” for the 1996 shutdown real?

Yes. A 2003 federal indictment exists against Cuban officers; Congress has described it as “outstanding.” This text does not invent additional defendants.

